

Punta Arenas, treinta de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTO, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 18 de marzo de 2024, la abogada **Karina Paola Mancilla Barría**, en representación de **1) LÍDICE YÉSSICA CABRERA PIÑONES**, cédula nacional de identidad N°10.344.839-5; **2) ALEJANDRO ENRIQUE SANHUEZA AGUAYO**, cédula nacional de identidad N°10.784.491-0; **3) MARÍA ESTER SZIGETHI CAMPOS**, cédula nacional de identidad N°8.581.135-5; **4) LISETTE JOANA MALDONADO CÁRDENAS**, cédula nacional de identidad N°13.970.685-4; **5) YASNA MARICEL SÁNCHEZ VIDAL**, cédula nacional de identidad N°15.309.482-9; **6) JESSICA MAGALY ALDERETE SALDIVIA**, cédula nacional de identidad N°9.431.230-2; **7) MACKARENA MABEL CÁRDENAS MANCILLA**, cédula nacional de identidad N°15.308.903-5; **8) VERÓNICA MABEL SÁNCHEZ OVANDO**, cédula nacional de identidad N°13.971.556-K; **9) JORGE ALEJANDRO BEATTIE OJEDA**, cédula nacional de identidad N°10.694.769-4; **10) MARÍA TATIANA NAVARRO HERNÁNDEZ**, cédula nacional de identidad N°8.179.507-K; **11) YOLANDA ERICA NAVARRO LEIVA**, cédula nacional de identidad N°8.285.692-7; **12) MARLENE SOFÍA SOTO COLIGIONES**, cédula nacional de identidad N°10.528.040-8; **13) OLIVERIO EDUARDO GARAY CÁRDENAS**, cédula nacional de identidad N°6.010.178-7; **14) JUAN EDMUNDO CONCHA SOTO**, cédula nacional de identidad N°7.851.330-6; **15) CARMEN GLORIA GUENCHUR CHIGUAY**, cédula nacional de identidad N°15.905.404-7; **16) ÁGUEDA IVONNE NINOSKA RABANAL TRONCOSO**, cédula nacional de identidad N°9.715.147-4; **17) XIMENA PAZ JABAT TWYMAN**, cédula nacional de identidad N°16.353.524-6; **18) DANIELA ALEJANDRA CÁRCAMO MANSILLA**, cédula nacional de identidad N°15.582.279-1; **19) MARCIAL LEONARDO MIRANDA OTEY**, cédula nacional de identidad N°10.380.518-K; **20) GEORGINA SELMIRA BARRIENTOS MIMIZA**, cédula nacional de identidad N°10.079.358K; **21) MANUEL ALEJANDRO ALCAYAGA VERA**, cédula nacional de identidad N°15.310.156-6; **y 22) SANDRA MABEL ÁLVAREZ PÉREZ**, cédula nacional de identidad N°8.378.403-2; todos domiciliados para estos efectos en pasaje España N°52, comuna de Punta Arenas, **dedujo demanda de cobro de prestaciones**



laborales en procedimiento de aplicación general, en contra de la Corporación Municipal De Punta Arenas Para La Educación. Salud Y Atención Al Menor, representada legalmente por su Secretaria General doña ELENA ALEJANDRA BLACKWOOD CHAMORRO, ambos con domicilio en calle Lautaro Navarro 890 en Punta Arenas, a fin de que le condenase al pago de las prestaciones que se solicitan en esta presentación, en base a los antecedentes de hecho y argumentos de derecho que se resumen a continuación:

Como **antecedentes generales**, señaló los siguientes:

I.- Los hechos.

i.- La Corporación Municipal de Punta Arenas tuvo calidad jurídica de sostenedora de los establecimientos educacionales de dependencia municipal de esta comuna -en los cuales se desempeñaron mis representados- hasta el día 31 de diciembre de 2023.

ii.- En razón de su condición de sostenedora de estos establecimientos, la Corporación Municipal fue empleadora de estos profesores, y en tal calidad, le correspondía la obligación de pagar sus remuneraciones en forma íntegra, conforme a las leyes que rigen la profesión docente.

iii.- En este sentido, asistía a mis representados el derecho a percibir la denominada "ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA" o la "ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA", consagrada en el artículo 51 de la Ley N°19.070, prestación de carácter mensual y permanente que corresponde a cada profesional de la educación que desempeñe un cargo directivo o de carácter técnico-pedagógico.

iv.- Conforme señalaba, mis mandantes desempeñaron cargos que llevaban aparejado el pago de la referida asignación, tales como: Inspector(a), Jefe(a) de Unidad Técnico-Pedagógica, Docente Apoyo Unidad Técnico-pedagógica o Inspectoría, Orientador(a), Encargado(a) de Convivencia y Coordinadores de Área (TécnicoPedagógico, Recursos para el Aprendizaje, Integración Escolar).



v.- Sin embargo, desatendiendo la normativa en comento, la Corporación Municipal de Punta Arenas no hizo pago de la asignación de responsabilidad en los porcentajes que dicha ley mandata. En este sentido, la asignación de responsabilidad directiva alcanza un monto mínimo calculado sobre la Remuneración Básica Mínima Nacional (en adelante e indistintamente, RBMN) de 25%, en el caso de los directores de establecimientos educacionales y de 20% en el caso de otros directivos. La asignación de responsabilidad técnico-pedagógica alcanza un monto mínimo de 20% en el caso de los jefes de Unidad Técnico-pedagógica (UTP) y de 15% en el caso de otro personal de las referidas unidades.

vi.- Como señalaba, en el caso de sus representados, la demandada no hizo pago íntegro -o, incluso, no hizo pago alguno- de esta asignación. En efecto, conforme se puede apreciar en las liquidaciones de remuneraciones acompañadas por la contraria en la etapa prejudicial, existió notoria disimilitud en las asignaciones pagadas a docentes que desempeñaron el mismo cargo en iguales épocas. Es el caso, por ejemplo, de los docentes integrantes de las Unidades TécnicoPedagógica, cuya asignación varió de un 0% a un 14%, para los Jefes de Unidad; y aún así, en los tramos máximos en que fue pagado se hizo por debajo del porcentaje legal, que como señalábamos, es un 20% de la remuneración Básica Mínima Nacional en el caso de este cargo. La misma situación se reitera respecto de los Orientadores, que -en idénticas condiciones y funciones- percibieron pagos por 6% de la RBMN en algunos casos, mientras que en otros, el porcentaje pagado ascendió a 14%. Con todo, en ningún caso se hizo pago total del porcentaje exigido legalmente. En lo que respecta a los Encargados de Convivencia, sólo algunos de los docentes que desempeñaron esta labor comenzaron a percibir una parte del porcentaje legalmente establecido a fines del año 2022, también en sumas disímiles y muy por debajo de los montos que debieron recibir. Finalmente, en el caso de otros docentes pertenecientes a las Unidades Técnico-pedagógicas, como son los Coordinadores de Área (Centro de Recursos para el Aprendizaje, Técnico-



Profesionales, Programa de Integración Escolar, etc.) no se les pagó monto alguno por concepto de asignación de responsabilidad.

vii.- En suma, sin ningún asidero legal y unilateralmente, la demandada fijó porcentajes diversos para una asignación cuyos márgenes se han establecido por ley. Podríamos incluso decir que su accionar ha sido arbitrario, toda vez que estamos en conocimiento que existieron docentes a los que se les pagó la asignación íntegra y oportunamente.

viii.- De esta contravención a la normativa dieron cuenta algunas fiscalizaciones solicitadas a la Inspección del Trabajo, que concluyeron en multas para la Corporación Municipal, al no hacer pago íntegro de las remuneraciones de algunos de los que fueron sus trabajadores y cuya función llevaba aparejada la asignación en cuestión.

ix.- En síntesis, y de acuerdo a lo señalado precedentemente, la demandada adeudaba a cada uno de sus representados los montos que detalló, por concepto de asignación de responsabilidad directiva y/o técnico-pedagógica, desde el mes de marzo de 2019 hasta la fecha, más reajustes e intereses.

x.- Los montos expresados precedentemente son referenciales, salvo mejor análisis que el tribunal de US. pueda realizar de acuerdo a los antecedentes que se aportarán en la etapa procesal correspondiente.

II.- El derecho.

A) De las remuneraciones de los docentes, y en especial, de la asignación de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica.

1.- Como bien sabe el tribunal, los derechos de los profesores están regulados por una ley estatutaria, contenida en el D.F.L N°1 de 22 de enero de 1997, que FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N°19.070, QUE APROBÓ EL ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN, Y DE LAS LEYES QUE LA COMPLEMENTAN Y MODIFICAN. Dicho cuerpo legal, en su título I, párrafo III, señala: "DE LOS DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE".



a.- Artículo 35: Los profesionales de la educación tendrán derecho a una remuneración básica mínima nacional para cada nivel del sistema educativo, en conformidad a las normas que establezca la ley, a las asignaciones que se fijan en este Estatuto, y sin perjuicio de las que se contemplen en otras leyes. Se entenderá por remuneración básica mínima nacional, el producto resultante de multiplicar el valor mínimo de la hora cronológica que fije la ley por el número de horas para las cuales haya sido contratado cada profesional.

b.- Artículo 62, inciso 4: Para los efectos de la aplicación de esta ley, se considerará que constituyen remuneración total las contraprestaciones en dinero que deban percibir los profesionales de la educación de sus empleadores, incluidas las que establece este cuerpo legal.

2.- A su vez, el mismo estatuto consagra la asignación de responsabilidad en su artículo 51°, inciso primero, al preceptuar que: “Las asignaciones de responsabilidad directiva y de responsabilidad técnico-pedagógica corresponderán a los profesionales de la educación que sirvan funciones superiores y alcanzarán los siguientes porcentajes mínimos calculados sobre la remuneración básica mínima nacional: a un 25% en el caso de los directores de establecimientos educacionales, a un 20% en el caso de otros directivos y de los jefes de unidades técnicopedagógicas y a un 15% en el caso de otro personal de las unidades técnicopedagógicas”

3.- A su turno, el artículo 5°, inciso primero, de ese cuerpo normativo, prevé que son funciones de los profesionales de la educación la docente y la docentedirectiva, además de las diversas funciones técnico-pedagógicas de apoyo.

4.- En el primer grupo, esto es, aquellos profesionales que cumplen funciones docentedirectivas, encontramos además de los directores de establecimientos educacionales, también a los Subdirectores e Inspectores Generales y todas aquellas: “de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica para la función o del cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso cuarto del artículo 24, se ocupa de lo



afinente a la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva tuición y responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios menores, y respecto de los alumnos". Asimismo, se consideran en esta hipótesis aquellos docentes que prestan apoyo en funciones de Inspectoría o apoyo Equipo Directivo.

5.- En cuanto a las funciones técnico-pedagógicas, el artículo 8° del mismo texto legal -en concordancia con el artículo 19 del decreto N°453, de 1991, del Ministerio de Educación, reglamento de esa ley-, prevé que "son aquellas de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica para cada función, se ocupan de los campos de apoyo o complemento de la docencia que la disposición indica de manera específica, tales como orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente y otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio de Educación, previo informe de los organismos competentes"

Se engloban en este último grupo, entonces: las funciones de los Orientadores; las de los Coordinadores Educación Técnico-Profesional; las de los Coordinadores de Centros de Recursos para el Aprendizaje (Así lo establece el Decreto N°126 del 12 de abril de 2022, del Ministerio de Educación, que declara las funciones de los Coordinadores de Centro de Recursos para el Aprendizaje como análogas a las funciones técnico-pedagógicas); las funciones de los Coordinadores del Programa de Integración Escolar (Artículo 8° de la Ley N°19.070 -en concordancia con el artículo 19 del decreto N°453, de 1991, del Ministerio de Educación, reglamento de esa ley- en relación al artículo 86, letra b), del decreto N°170, de 2009, del Ministerio de Educación, y como lo ha señalado la Contraloría General de la República en dictamen N°93137 de 28 de diciembre de 2016); las funciones de Encargado de Convivencia Escolar (Dictámenes N°15.346, de 2018 y N°82.235, de 2015 de la Contraloría General de la República. En el mismo sentido,



Ord. N°4387 de la Dirección del Trabajo); las funciones de Orientadores Escolares; y por supuesto, las funciones de docentes de apoyo técnico-pedagógico.

B) En cuanto al plazo para impetrar el cobro de las prestaciones cuyo pago se demanda.

Según lo expuesto precedentemente, al no pagar íntegra y oportunamente a mis representados los montos correspondientes a ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, la demandada ha infringido lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley N°19.070. Al tratarse de un beneficio de carácter especial que no está contemplado en el Código del Trabajo, sino en una ley especial –Ley N°19.070- o Estatuto Docente, norma que no contempla un plazo de prescripción de los derechos que en él se establecen, que debemos remitirnos al plazo de prescripción general de responsabilidad contractual de 5 años, tal como ha señalado la Excm. Corte Suprema en autos Rol N°2829-2014, conociendo de recurso de unificación de jurisprudencia, en que resolvió que “en los casos en que los beneficios reclamados tienen su origen en una ley especial y no en las normas del Código del Trabajo, no resulta aplicable en la especie lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, desde que dicho precepto alcanza o regula únicamente, los derechos regidos por este Código”. Idéntico criterio ha sido recogido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, a propósito de recurso de apelación que sobre esta misma materia se interpuso en autos Rol de Ingreso N°46-2015, Caratulados “Galleguillos con Corporación Municipal de Punta Arenas”, resolución firme y ejecutoriada que dispone: “al no existir en las leyes que forman parte del Estatuto Docente, un plazo de prescripción especial para los beneficios laborales que allí se indican, deben aplicarse las reglas del Derecho Civil, que sobre esta materia disponen el artículo 2515 que en relación con el artículo 2514 de esta misma fuente legal, establece un plazo legal de prescripción para las acciones ordinarias de cinco años contados desde que la obligación se hubiere hecho exigible”.

III.- Peticiones concretas.

En mérito de lo expuesto, solicitó que se declarase que:



1.- Que se adeudaba a sus representados el pago de la asignación de responsabilidad directiva o de asignación técnico-pedagógica, conforme corresponda, por el período comprendido entre el mes de abril de 2019 a diciembre de 2023, y mientras hubieren desempeñado la función que da derecho a percibirla.

2.- Que se ordenase el pago íntegro de las prestaciones adeudadas, o las sumas que por tal concepto el tribunal determinara conforme al mérito de autos, dejándose para la etapa de cumplimiento de la sentencia la determinación del monto que corresponde a cada uno de los demandantes, de acuerdo a los antecedentes que se aportarían en la etapa procesal correspondiente.

3.- Que todas las sumas condenadas a pagar deberían reajustarse y con los intereses correspondientes, todo ello en conformidad al artículo 63 del Código del Trabajo y,

4.- Que la demandada debería pagar las costas de la causa.

SEGUNDO: Que, **la demandada interpuso la excepción de prescripción extintiva**, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 452 del Código del Trabajo, en relación con lo dispuesto en los artículos 425 y siguientes del mismo cuerpo legal, con expresa condena en costas, de acuerdo a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

La contraria solicitaba que se declarara que su parte le adeudaba a sus representados las asignaciones de responsabilidad o de asignación técnico-pedagógica entre el mes de abril de 2019 y diciembre de 2023.

Sin reconocer los hechos a los cuales hacía referencia la parte demandante, era y resultaba evidente que estas peticiones se encontraban prescritas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, debiendo aplicarse entonces la norma general laboral de dos (2) años de prescripción extintiva de derechos, del inciso primero de la norma en comento, que dispone lo siguiente: “Los derechos regidos por este Código prescribirán en el plazo de dos años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles”.



Por ello resultaba evidente que estas acciones se encontraban prescritas a lo menos parcialmente, y que en consideración a la fecha de ingreso de la demanda al tribunal, esto es, el 17 de junio de 2024 y considerando el plazo de prescripción antes indicado, estando prescrita la acción de cobro de todas las asignaciones devengadas con anterioridad al 17 de junio de 2022, es decir, atendido que estábamos ante derechos establecidos y que nacían de la relación laboral, que se encontraban en el Estatuto Docente.

En este punto, citó jurisprudencia dictada por la Excmá. Corte Suprema, la que, en distintos fallos conociendo de recursos de Unificación de Jurisprudencia, dictados en las causas Rol N°19.100-2017 y Rol N°77492019 -esta última en sentencia de 02 de marzo de 2020, 78-2018-, resolvió determinándolo en la forma señalada.

TERCERO: Que, en cuanto al fondo, la demandada **contestó la demanda, solicitando su rechazo, en virtud de las siguientes consideraciones:**

En la demanda se individualizaba a 22 actores, respecto de quienes se podía apreciar un cuadro resumen en el que se indicaba la función directiva o técnico-pedagógica que había desarrollado, los meses y años en que cumplió dicha función, el monto que efectivamente se le pagó como porcentaje de asignación de dicha responsabilidad según correspondía, y por último la diferencia que alegaba se le adeudaba en cada uno de los casos.

En primer lugar, indicó que el porcentaje señalado en cada una de las liquidaciones de remuneraciones de los demandantes (en los casos en que efectivamente se pagó el porcentaje de asignación de responsabilidad que correspondía), y que correspondían a aquellas en las que se reclamaban las supuestas diferencias en el pago de las asignaciones de responsabilidad por cargo directivo y/o responsabilidad técnico-pedagógica, encontraba su fundamento en la resolución interna N°04/262 de 20 de abril de 2015 de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, la Salud y Atención al Menor, que fijaba, a contar de abril del año 2015, porcentajes de Asignación de Responsabilidad Directiva, para cada uno de los establecimientos educacionales



dependientes de la Corporación que les correspondería percibir a los profesionales de la educación que sirvieran funciones superiores Directivo Docentes en calidad de titulares y funciones técnico-pedagógicas.

La resolución antes indicada contenía una tabla con el porcentaje de asignación de responsabilidad que se pagaría a cada uno de los cargos directivos con el detalle de cada uno de los establecimientos educacionales de enseñanza media y básica. Dicha tabla consideraba para el cálculo de porcentaje a pagar en cada caso, factores como por ejemplo la matrícula del establecimiento.

Con el fin de aclarar un punto relevante antes de ir al análisis del caso a caso respecto de los demandantes, señaló que las asignaciones demandadas correspondía a quienes habían sido contratados para ejercer funciones directivas o técnico-pedagógicas. En este sentido se entendía por docentes directivos al director, subdirector e inspector general y en cuanto a los docentes técnico pedagógicos, se incluía al jefe de la unidad técnico-pedagógica y al orientador, pudiéndose incorporar a este grupo aquellos profesionales que hubiesen sido contratados para desarrollar ese tipo de funciones (técnico-pedagógicas) como, por ejemplo, el encargado de convivencia escolar y el coordinador PIE.

Atendido lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto Docente y en el inciso 1º del artículo 120 del Decreto Supremo N°453, de 1991, de Educación, Reglamentario del Estatuto Docente, y de lo sostenido por la Dirección el Trabajo en su jurisprudencia administrativa, la asignación de responsabilidad técnico-pedagógica correspondía a aquellos profesionales de la educación que desempeñasen cargos superiores, correspondientes a "funciones técnico-pedagógicas". De las normas antes señaladas se infería que los requisitos exigidos por el legislador para que un profesional de la educación pudiera acceder al beneficio de la asignación de responsabilidad técnico-pedagógica, eran los siguientes:

a) que el referido docente desempeñase una función técnico- pedagógica y,



b) que en el desempeño de tal función el profesional de la educación detentase un cargo superior.

El artículo 19 del decreto 453 señalaba lo siguiente:

“Artículo 19° Las funciones docentes técnico-pedagógicas son aquellas de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica para cada función, se ocupan de campos de apoyo o complemento de la docencia, tales como:

- Orientación educacional y vocacional; supervisión pedagógica; planificación curricular; evaluación del aprendizaje; investigación pedagógica; coordinación de procesos de perfeccionamiento docente; y otras análogas que se determinen, previo informe de los organismos competentes, por Decreto del Ministerio de Educación”.

Ahora bien, considerando lo antes dicho, y sólo para el caso de que el tribunal considerase que efectivamente existían diferencias adeudadas en el pago de las asignaciones demandadas, debía analizarse algunos de los casos particulares de los demandantes:

La demandante N°3, doña María Ester Szigethi Campos, señalaba haber ejercido el cargo de Coordinadora Jornada Vespertina en el periodo comprendido entre abril de 2019 y diciembre de 2023, sin embargo, constaba en sus liquidaciones de remuneraciones y en su documentación contractual que ella ejercía funciones como docente medio del liceo Industrial Armando Quezada Acharan de la ciudad de Punta Arenas, situación que era plenamente coincidente con el hecho de no percibir la demandante monto alguno por concepto de asignación de responsabilidad, ya dicha asignación no correspondía ser pagada a docentes que no ejercieran una función directiva o técnico-pedagógica, al menos hasta el año 2022. De hecho, la Sra. Szigethi Campos había adquirido la titularidad de 44 horas como docente medio en el mes de abril de 2020, hasta febrero de 2022, siendo recién en marzo de 2022 el momento en el que, según su documentación contractual, comenzó a ejercer la



función de “coordinador vespertino”, lo que se extendía efectivamente hasta el año 2023.

Ahora bien, según lo que se había señalado anteriormente, la función de coordinador vespertino evidentemente no correspondía a un cargo directivo, y tampoco correspondía a una función técnico-pedagógica ya que no cumplía con los requisitos para serlo.

En el caso de la demandante signada con el número 4, doña Lisette Maldonado Cárdenas, según su documentación contractual, no era efectivo que se hubiera desempeñado como jefa de la unidad técnico-pedagógica desde abril del 2019 a diciembre de 2023, constando en todas y cada una de las liquidaciones de remuneraciones de dichos períodos que ésta siempre había sido docente básico y/o docente medio mientras prestó servicios para la corporación municipal de Punta Arenas. La señora Maldonado entre abril y diciembre del 2019 estaba contratada por 17 horas y 10 horas como docente básico, luego en mayo a diciembre del mismo año tuvo 10 horas como docente básico a contrata.

Posteriormente de marzo a diciembre del año 2020 había tenido 10 horas como docente básico, 20 horas como docente medio y 10 horas como docente de apoyo, contratación que se había extendido hasta febrero del año 2021. Luego, en marzo del 2021 hasta el año 2022 tenía 9 horas como docente básico y 33 horas como docente medio. La situación anterior se había modificado a partir del año 2022 en donde tenía 33 horas como docente medio que pasaron a titulares y 9 horas más 2 horas como docente medio. Por último en el año 2023 desde marzo y hasta diciembre de dicho año, tenía nuevamente 33 horas como docente medio (titulares) continuando con las 9 y 2 como docente medio.

En este caso la única diferencia consistía en la función de docente de apoyo que había ejercido entre marzo y diciembre del año 2020 sin embargo aquella función no era directiva y tampoco técnico pedagógico por lo que no correspondía el pago de ninguna asignación a la señora Maldonado, estando correcto en los montos pagados en las liquidaciones de remuneración.



En el caso de la demandante N°3, doña Yasna Sánchez Vidal, ésta señalaba haber sido Jefa de la Unidad Técnico-pedagógica en el periodo de agosto del 2021 a diciembre del 2023, sin embargo esto no era efectivo ya que entre agosto del 2021 y febrero del 2022 la demandante se había desempeñado como docente básico y no como jefa de la unidad técnico-pedagógica, lo anterior se veía reflejado no sólo en las liquidaciones de remuneraciones de esos periodos, sino que además en su documentación contractual.

La demandante número 5 doña Jessica Alderete Saldivia, señalaba que habría sido encargada de convivencia escolar desde marzo del 2021 hasta diciembre del 2023, sin embargo, existía un período, comprendido entre septiembre y noviembre del año 2022, en que la señora Alderete se había desempeñado como docente básico, lo que constaba en sus liquidaciones de remuneraciones y en su documentación contractual.

En el caso de la demandante número 11 doña Yolanda Navarro Liva, existían dos particularidades muy claras, la primera de ellas decía relación con que, según sus liquidaciones de remuneraciones de los periodos abril 2019 a diciembre de 2023, en ellas se indicaba que habría sido coordinadora de centro de recursos de aprendizaje, esta habría sido realmente docente básico. Sin perjuicio de lo anterior debía señalar que como coordinadora del centro de recursos de aprendizaje (biblioteca), no correspondía el pago de asignación por función directiva y tampoco por función técnico-pedagógica, debido a que no estábamos ante los supuestos que la ley establecía para ser beneficiario de esta asignación, no siendo éste un cargo superior y tampoco ejerciéndose en el mismo esta función técnico-pedagógica requerida para acceder a dicho beneficio.

En la misma situación anterior se encontraba la demandante número 12 doña Marlene Sofía Soto Coligiones, quien señalaba haber sido coordinadora del centro de recursos aprendizaje (liceo Luis Alberto barrera), lo que no daba origen a la obligación por parte de su mandante al pago de ningún tipo de asignación ya que en el caso de lo demandado, esto es, la asignación por función técnico-pedagógica, esta no procedía en el caso de la señora Soto, ya que la función



que ésta ejercía no cumplía con los requisitos para tener derecho al pago de la misma. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, la señora Soto, según sus liquidaciones de remuneraciones entre el mes de abril del año 2019 y el mes de febrero del año 2022, se encontraba contratada como docente medio, apareciendo la función de coordinadora de centro de recursos aprendizaje recién en el mes de marzo del 2022 hasta diciembre del año 2023, lo que debía ser considerado en caso de estar de acuerdo el tribunal con la demandante y considerar que le correspondía efectivamente el pago de la asignación reclamada.

El demandante número 13 Oliverio Eduardo Garay Cárdenas, señalaba haber sido inspector general entre abril de 2019 y mayo del 2022, sin embargo esto no era efectivo ya que el cargo de inspector general lo había ejercido entre abril del 2019 y febrero del 2022, no siendo efectivo que hubiese sido inspector general desde marzo del 2022 en adelante, por lo que en este último periodo no le correspondía la asignación reclamada.

En el caso de la demandante número 16, doña Agueda Rabanal Troncoso, se indicaba que en el periodo de marzo del 2020 a febrero del 2021 había sido encargada de convivencia escolar y que desde marzo del 2022 a diciembre del 2023 había sido jefa de la unidad técnico-pedagógica. Al respecto podía decir que desde marzo del 2020 hasta febrero del 2021 la señora Rabanal cumplía funciones como docente medio, lo que se reflejaba claramente en las liquidaciones de remuneraciones de la demandante y también en la documentación contractual de la misma. Luego ,en el período comprendido entre abril del 2021 y diciembre del mismo año, su función correspondía a docente de apoyo y no a encargada de convivencia, no correspondiéndole el pago de asignación alguna, por no ser ésta una función técnico o pedagógica.

El demandante número 19, don Marcial Miranda Otey, señalaba haber sido encargado de convivencia escolar entre marzo de 2023 y diciembre del mismo año, sin embargo, debía señalar que en el mes de enero y febrero del año 2023 este figuraba contratado como docente medio. Ahora bien, sin perjuicio de lo



anterior, debía hacer una distinción que era muy relevante, ya que según su liquidación de remuneraciones el señor Miranda estaba contratado entre marzo y diciembre del 2023 por 11 horas como docente y 33 horas como encargado de convivencia, por lo que el monto pagado por concepto de asignación de responsabilidad como encargado de convivencia escolar, que equivalía al 8% según su liquidación de remuneraciones, debía ser calculado respecto de las 33 horas como encargado de convivencia escolar y no sobre sus 44 horas totales, ya que eran estas horas las que daban origen al pago de dicha asignación y no las otras 11 como docente. Así las cosas, la supuesta diferencia o monto adeudado no era tal, ya que la que estaba en el cuadro correspondiente a don Marcial equivalía al cálculo del 15% sobre el total de su sueldo base esto es \$813.780, pero para estos efectos esto debía ser calculado sobre el sueldo base de las 33 horas que efectivamente se encontraban contratado como encargado de convivencia, esto es sobre \$610.335, por lo que ese no 15% demandado corresponde a un monto de \$91.550 y no al monto indicado por la demandante.

Como podía apreciarse, la Corporación Municipal de Punta Arenas había procedido al pago en todo y cada uno de los casos en que correspondía pagar efectivamente una asignación de responsabilidad directiva o técnico-pedagógica, lo que se reflejaba en cada una de las liquidaciones de remuneraciones.

Que los porcentajes pagados se encontraban de acuerdo a la resolución interna N°04/262 de 20 de abril de 2015 de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, la Salud y Atención al Menor, que había fijado, a contar de abril del año 2015, porcentajes de Asignación de Responsabilidad Directiva, para cada uno de los establecimientos educacionales dependientes de la Corporación que les correspondía percibir a los profesionales de la educación que sirvieran funciones superiores Directivo Docentes en calidad de titulares y funciones técnico-pedagógicas.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado y para el caso de que el tribunal considerase y que esta asignación no había pagada en forma correcta y que



estimara que las alegaciones de la demandante eran fundadas, era necesario tomar en consideración las particularidades en cada uno de los casos ya que no era efectivo que a todos los demandantes les correspondiera el pago de las asignaciones demandadas, de acuerdo a lo que establecía la ley, fuese por no haber ejercido el cargo señalado en los periodos indicados, por ser una función a la que no le correspondía el pago de las asignaciones reclamadas, o bien por haber un error en el cálculo de la forma en que se había realizado, de acuerdo a las horas contratadas para la función que daba origen al pago de esa asignación.

Por lo anteriormente señalado, y de acuerdo al petitorio de la demanda, solicitó el total rechazo de la demanda con expresa condena en costas, por no existir diferencias que pagar, no procediendo en consecuencia la declaración solicitada en los puntos 1, 2 y 3 del petitorio, no siendo efectivos los hechos, no procedía el pago de las sumas demandadas.

CUARTO: Que, **en la audiencia preparatoria** realizada con fecha 19 de julio de 2024, **la parte demandante evacuó el traslado** conferido, respecto **a la excepción de prescripción**, pidiendo su rechazo, tras lo cual el tribunal **la acogió parcialmente, sólo en cuanto se declaró prescrita la acción** de cobro de las asignaciones cuyo pago se reclama, **del período que va desde abril de 2019 a febrero de 2022, ambos meses incluidos, sin costas**, por haber existido motivo plausible para litigar.

QUINTO: Que, por último, en la audiencia preparatoria **se fijó el siguiente hecho conforme:** “Que los demandantes prestaron servicios para la demandada”.

Asimismo, se fijó el siguiente **hecho a probar:** “**Efectividad que la demandada pagó íntegramente las asignaciones de responsabilidad directiva y/o técnico-pedagógicas en el período comprendido entre abril de 2022 y diciembre de 2023. Hechos y circunstancias que lo justifican**”.



SEXTO: Que, **la parte demandante rindió**, de aquella ofrecida en la audiencia preparatoria, sólo **las siguientes pruebas** (pues se desistió del documento N°13, así como de la **confesional** -consistente en la declaración de la representante legal de la demandada, doña Elena Blackwood Chamorro- y del testigo don Patricio Bórquez Ojeda):

I.- Documental, consistente en los siguientes **liquidaciones de remuneraciones de los demandantes**, correspondientes a los períodos que en cada caso se indican, que se incorporaron válidamente mediante su lectura resumida (cuya numeración en la minuta de prueba se mantuvo, para su mejor comprensión):

I.1.- Lídice Yessica Cabrera Piñones, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;

I.2.- Alejandro Enrique Sanhueza Aguayo, desde marzo de 2023 a diciembre de 2023;

I.3.- María Ester Szigethi Campos, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;

I.4.- Lisette Joana Maldonado Cárdenas, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;

I.5.- Yasna Maricel Sánchez Vidal, desde abril de 2022 a diciembre de 2023.

I.6.- Jessica Magaly Alderete Saldivia, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;

I.7.- Mackarena Mabel Cárdenas Mancilla, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;

I.8.- Verónica Mabel Sánchez Ovando, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;

I.9.- Jorge Alejandro Beattie Ojeda, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;

I.10.- María Tatiana Navarro Hernández, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;

I.11.- Yolanda Erica Navarro Leiva, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;



- I.12.-** Marlene Sofía Soto Coligiones, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;
- I.14.-** Juan Edmundo Concha Soto, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;
- I.15.-** Carmen Gloria Guenchur Chiguay, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;
- I.16.-** Agueda Ivonne Rabanal Troncoso, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;
- I.17.-** Ximena Paz Jabat Twyman, desde marzo de 2023 a diciembre de 2023;
- I.18.-** Daniela Alejandra Cárcamo Mansilla, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;
- I.19.-** Marcial Leonardo Miranda Otey, desde marzo de 2023 a diciembre de 2023;
- I.20.-** Georgina Selmira Barrientos Mimiza, desde abril de 2022 a diciembre de 2023;
- I.21.-** Manuel Alejandro Alcayaga Vera, desde octubre de 2022 a diciembre de 2023; y
- I.22.-** Sandra Mabel Álvarez Pérez, desde abril de 2022 a febrero de 2023.

II.- Testimonial, consistente en las declaraciones de las siguientes personas, quienes, previamente juramentadas en forma legal, señalaron en cada caso y en resumen, que:

II.1.- Víctor Manuel Lara Yáñez, administrador público y contador general, domiciliado en calle Alto Pinar N°0640, Punta Arenas.

Estaba cesante. Antes de eso trabajó en la CORMUPA, desde 1981, cumpliendo una serie de cargos y funciones, la última había sido la de Director de RR HH y Remuneraciones. Desde el 2013 al 2015 y desde el 2018 al 2022.

Dejó de trabajar para CORMUPA el 31 de diciembre de 2023. Su último cargo fue en planes de retiro, una de las funciones que tenía antes de que lo removieran de su cargo.



Era demandante en un juicio contra CORMUPA. No demandaba no pago de asignaciones de responsabilidad.

No tenía interés en el resultado de este juicio.

Sabía lo que era una asignación de responsabilidad directiva o técnico-pedagógica, que se pagaba según el Estatuto Docente Ley 19070, conforme al cargo y función de los docentes directivos, que era un porcentaje, de acuerdo a la matrícula de cada establecimiento educacional, según tramos, que arrojaban un porcentaje del sueldo base del docente.

Creía que no podía exceder del 35%, pero CORMUPA pagaba hasta el 15%, bajo el 20%.

Lo sabía por haber sido Director de RR HH y Remuneraciones y tenía que ver con ese trabajo. Era el funcionario a cargo de ello. Solicitaba todos los años, en diciembre o enero, que se le enviara una resolución de parte del Departamento de Planificación y Proyectos, quienes tenían la tarea de recopilar la matrícula para el próximo año. Pedía formalmente los datos o la resolución y, con ello, sacaban la resolución final señalando qué porcentaje correspondía a cada docente directivo. El porcentaje lo fijaba el equipo directivo, del Departamento de Educación con el Secretario General. Así se había determinado y los porcentajes se mantuvieron.

Creía que la última actualización de eso había sido por el 2017 y luego se habían congelado. No había recibido ningún documento explicando el por qué, pero se imaginaba que se determinaba por el Departamento de Finanzas con el equipo de Educación. SE imaginaba que había sido por temas de financiamiento.

Durante su desempeño había habido reclamos y consultas de docentes directivos, en relación a por qué se les seguía pagando lo mismo. Luego, el 2018 había salido una ley o dictamen, no recordaba, donde el Coordinador Encargado de Convivencia Escolar del PIE del DEM también se asimilaba a esa categoría, correspondiéndoles la asignación. Respecto de esos funcionarios había recibido muchas consultas. Se les había informado la situación,



señalándoseles que se estaba analizando la ley. Que él supiera, eso nunca se resolvió, quedando pendientes hasta que el dejó de trabajar en la CORMUPA.

Él era el responsable, junto a la encargada de personal, de elaborar los contratos de los docentes. Ella los generaba y él los revisaba.

Las funciones desarrolladas por los docentes se correspondían con los contratos, en un porcentaje mayor. Algunos casos no, se imaginaba que por decisión del Director (del establecimiento) respectivo, sin que les llegara la información a ellos, en la CORMUPA, para hacer la modificación del contrato o su actualización. Lo mismo concurría, se imaginaba, con los Coordinadores de Convivencia. Así, aparecían en los contratos con una función, pero cumplían otra.

Eso en primera instancia era informal. Pero, transcurrido el tiempo, se daba a conocer en alguna reunión con la CORMUPA, o en algún correo. Pero a veces eso no llegaba a RR HH o la orden para hacer dicha modificación.

En los anexos de contrato sobre distribución horaria tampoco se plasmaba, salían sólo como docentes.

Contrainterrogado por la parte demandada, agregó que:

En cuanto a lo último señalado, que se produjesen informalmente esos cambios de funciones, se fue enterando con el tiempo, informado de ello por los propios docentes. En el departamento de personal. Enterándose a veces por el encargado de personal, investigando y determinando que se estaba haciendo otra función. En esos casos, había una retroalimentación con Educación, poniéndoles en conocimiento de lo sucedido con determinado funcionario. Pero eso *quedaba ahí*, de repente. Pero a él no se le instruía formalmente, no se le daba la orden para actualizar los contratos. Esas órdenes debiesen haber llegado desde la Jefa del Departamento de Educación, que era la jefa de área. Se le debió haber pedido formalmente hacer la actualización contractual, según el detalle indicado. Porque ellos eran el departamento técnico pedagógico.



II.2.- Alicia Del Carmen Vidal Yáñez, profesora, Inspectora General del Liceo Politécnico, domiciliada en Pasaje Mar de Azov N°01058, Loteo del Mar, Punta Arenas.

Su empleador era SLEP Magallanes, desde 1 de enero de 2024. En el Liceo, desde marzo del mismo año.

Antes de eso, trabajaba para la CORMUPA. Entre los años 1990 hasta diciembre de 2023. Había estado en la Escuela Hernando de Magallanes, en la Escuela Juan Williams y la mayor parte de su carrera en la Escuela Bernardo O'Higgins, en esta última desde 2014 en adelante.

En esta última había sido docente de aula, 1er ciclo, luego 2º ciclo y luego, jefa de UTP, desde el 2015 al 2022.

Las funciones docentes se definían en 2 grupos, los directivos docentes y los docentes propiamente tales, según el Estatuto Docente. Las primeras eran aquellas de nivel superior, compuestos por los directivos y los de gestión técnico-pedagógica. Los primeros eran el Director, el Jefe de UTP y el Inspector General. Eran cargos de confianza, además.

En los segundos estaban los Encargados o Coordinadores CRA, el Encargado PIE. Eran varias subunidades. Orientación también.

El Encargado de Convivencia dependía directamente del Jefe Técnico, al igual que el coordinador CRA.

Conocía a Marcial Miranda Otey, quien era docente de matemáticas en el liceo donde hoy trabajaba y tenía 37 horas destinadas como encargado de convivencia escolar. Las restantes era como docente de matemáticas. Cuando ella llegó en marzo, se enteró. No sabía para atrás.

A doña Yolanda Navarro Leiva también la conocía, pues cuando ingresó a la Escuela Bernardo O'Higgins ésta llevaba varios años, desde 1996, primero como docente de aula y luego como Coordinadora CRA, desde 2018. Ella-la testigo- lo había gestionado. Porque las subunidades dependían de la Jefatura Técnica.



Existiendo la vacante por ley, habían podido activar esa función dentro del establecimiento. Lo habían hecho con el Director.

La coordinadora CRA cumplía la función de llevar todo el proceso administrativo y de coordinación de la biblioteca escolar del establecimiento, la adquisición de textos, el uso de la biblioteca, que se hacía no solo para que los estudiantes tuvieran acceso a libros, sino que también para gestionar medios digitales, reuniones, encuentros, juegos, talleres, etc., en ese espacio. Los Encargados CRA, a cargo de dicha Coordinadora, eran asistentes de la educación y no tenían título de profesor. Le parecía que había estado 2 ó 3 años en ese cargo.

II.3.- María Isabel Espejo Aguayo, profesora, domiciliada en calle Josefina Brigando N°3333, Punta Arenas.

Era profesora básica desde hacía muchos años. Trabajaban en la Escuela Bernardo O'Higgins desde 1987.

No tenía interés personal en el resultado del juicio.

Conocía a Yolanda Navarro Leiva, cuando ésta llegó como el año 1996 a la escuela. Como profesora básica. Después, con el tiempo había sido designada Coordinadora de Biblioteca CRA. Esto último había sido el 2018 y durado hasta esta fecha. No sabía si estaba en la lista de quienes se retirarían, pero aún tenía dicho cargo.

En tal calidad cumplía funciones técnicas, elegida por el equipo de gestión, atendiendo a los niños que usaban la biblioteca. Además, atendía a los pequeños que no hacían religión. Los cursos más pequeños desarrollaban actividades en dicha biblioteca una hora a la semana. Además, hacía concursos de deletreo, todo lo que era la parte de lenguaje. De ella dependía una asistente de alumnos.

III.- Exhibición documental: solicitó que se exhibieran por la demandada los **anexos de contratos de trabajo distribución horaria**, correspondientes al período



comprendido entre los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023, de todos los demandantes.

La **parte demandada** señaló no poder cumplir con ello, pues las *distribuciones horarias* no las manejaba la Corporación. Eventualmente podrían estar en cada establecimiento, establecimientos que no dependían de dicha parte.

La parte demandante pide que se haga efectivo el apercibimiento legal por no exhibir, sin causa justificada, las modificaciones de contrato, documentos que legalmente la demandada se encontraba obligada a mantener en su poder (conforme al artículo 11 del Código del Trabajo), no pudiendo alegar su inexistencia, dado que el año 2021 entró en vigencia el Registro Electrónico Laboral que exige a los empleadores tener dichas modificaciones en el Sistema de la Dirección del Trabajo, cargándolas, dentro de quince días de suscritas, en la página web de la Dirección del Trabajo, conforme al artículo 515 del Código del Trabajo, en relación al Decreto N°37 del Ministerio del Trabajo, que estuvo vigente entre octubre 2021 y junio de 2023, reemplazado posteriormente por el Decreto N°14, artículo 3°, que consagró la misma obligación.

La **parte demandada evacuó el traslado** conferido, reiterando lo ya indicado, esto es, que al momento de cargar en el sistema los documentos requeridos, era la totalidad de lo existente en CORMUPA. Los anexos con distribución horaria no existían. No era que no los hubiesen custodiado, no los tenían. A su juicio, no existían. Sin perjuicio de existir, en el área de Educación, los documentos denominados "avisos al director", no estaban en su poder, sino que eran de manejo interno de los establecimientos. Actualmente no era administradora ni sostenedora de dichos establecimientos.

El tribunal dejó su resolución para la presente sentencia, lo que se hará más adelante, al efectuarse la apreciación de la prueba rendida para la determinación de los hechos que resulten finalmente probados.



IV.- Oficios: solicitó y obtuvo que se oficiara **al Ministerio de Educación**, con el objeto de que informara al Tribunal, lo siguiente:

1.- Cuáles son las funciones del cargo de Coordinador Jornada Vespertina de establecimientos educacionales; y

2.- Cuál es la naturaleza de las funciones de los cargos Coordinador Jornada Vespertina y Coordinador Centros de recursos para el aprendizaje, indicando si esta naturaleza es directiva o técnico-pedagógica.

Lo anterior se cumplió por dicha repartición mediante oficio Ord. N°07/4526, de don Vicente Aliaga Medina, jefe de la División Jurídica de dicho ministerio, fecha 21 de agosto de 2024 (Constando en el folio 39 de la carpeta digital), cuyo tenor es el siguiente:

“Junto con saludar, en relación con el oficio del antecedente, por el que se solicita a esta Cartera de Estado informar "1. Cuáles son las funciones del cargo de Coordinador Jornada Vespertina de establecimientos educacionales, y 2. Cuál es la naturaleza de las funciones de los cargos Coordinador Jornada Vespertina y Coordinador Centros de Recursos para el aprendizaje, indicando si esta naturaleza es directiva o técnico-pedagógica", consultado con el Comité de Normativa de esta Subsecretaría, se informa lo siguiente:

Que conforme al artículo 8° del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, dispone que: "Las funciones técnico-pedagógicas son aquellas de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica para cada función, se ocupan respectivamente de los siguientes campos de apoyo o complemento de la docencia: orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica, coordinación de procesos de perfeccionamiento docente y otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio de Educación, previo informe de los organismos competentes".



Ahora bien, para el cargo de "Coordinador Jornada Vespertina", no existe una definición legal. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha señalado que dicha función tiene carácter técnico-pedagógico, en los términos dispuestos por la recién citada ley (Dictamen N°4807 de 2004).

Asimismo, el ente contralor ha señalado mediante su jurisprudencia administrativa que "En las condiciones anotadas, es conveniente indicar que son de índole técnico-pedagógica las contrataciones para ejercer las labores de encargado de convivencia escolar, coordinador del centro de recursos, coordinador de educación diferencial en el DAEM, coordinador técnico-pedagógico en el DAEM, coordinador comunal del Proyecto de Integración Escolar (PIE) en el DAEM y coordinador comunal de educación parvularia en el DAEM, entre otras" (aplica criterio de los dictámenes N°13153 de 2002, N°73026 de 2015, N°3484 de 2018, N°29813 de 2018 y E5664 de 2020), por lo que se emplea el mismo sentido al cargo de "Coordinador de Centro de Recursos para el Aprendizaje"

SÉPTIMO: Que, **la parte demandada** **rindió únicamente** las siguientes **probanzas** (desistiéndose del documento N°36 ofrecido en la audiencia preparatoria):

I.- Documental, consistente en los siguientes, que se incorporaron válidamente mediante su lectura resumida (cuya numeración en la minuta de prueba se mantuvo, para su mejor comprensión):

I.1.- Modificación de contrato de trabajo, docentes directivos establecimientos educacionales de 01 de marzo de 2019, entre Corporación Municipal de Punta Arenas y doña **Lídice Cabrera Piñones**;

I.2.- Contrato de trabajo profesional de la educación de 01 de marzo de 2023 entre Corporación Municipal de Punta Arenas y don **Alejandro Sanhueza Aguayo**;

I.3.- Documento de la Corporación Municipal de Punta Arenas denominado: Modificación de jornada de doña **María Szigethi Campos**;



I.4.- Modificación al contrato de trabajo profesional de la educación de doña **María Szigethi Campos**, de fecha 01 de abril del año 2020 celebrado con Corporación Municipal de Punta Arenas;

I.5.- Modificación contrato de trabajo, estatuto docente, ley 19070, de fecha 01 de marzo del año 2022 de doña **María Szigethi Campos**;

I.6.- Modificación al contrato individual de trabajo profesional de la educación de doña **María Szigethi Campos**;

I.7.- Contrato de trabajo profesional de la educación de fecha 13 de marzo del año 2019 entre Corporación Municipal de Punta Arenas y doña **Lisette Maldonado Cárdenas**;

I.8.- Modificación de jornada de reemplazo de fecha 27 de mayo del año 2019 de doña **Lisette Maldonado Cárdenas**;

I.9.- Documento de la Corporación Municipal de Punta Arenas denominado modificación de jornada correspondiente a doña **Lisette Maldonado Cárdenas**;

I.10.- Modificación de jornada de reemplazo de fecha 14 de junio del año 2019, correspondiente a doña **Lisette Maldonado Cárdenas**;

I.11.- Documento de la Corporación Municipal de Punta Arenas denominado modificación de jornada de fecha 02 de marzo del año 2020, correspondiente a doña **Lisette Maldonado Cárdenas**;

I.12.- Documento de la Corporación Municipal de Punta Arenas denominado modificación de jornada de fecha 05 de marzo del año 2020, correspondiente a doña **Lisette Maldonado Cárdenas**;

I.13.- Contrato de trabajo profesional de la educación de fecha 01 de marzo del año 2021, entre Corporación Municipal de Punta Arenas y doña **Lisette Maldonado Cárdenas**;

I.14.- Documento de la Corporación Municipal de Punta Arenas denominado modificación de jornada de fecha 01 de marzo del año 2021, correspondiente a doña **Lisette Maldonado Cárdenas**;



I.15.- Documento de la Corporación Municipal de Punta Arenas denominado distribución de jornada de fecha 01 de marzo de 2022, correspondiente a doña **Lisette Maldonado Cárdenas**;

I.16.- Contrato de trabajo profesional de la educación titular, de fecha 01 de marzo del año 2022 celebrado entre Corporación Municipal de Punta Arenas y doña **Lisette Maldonado Cárdenas**;

I.17.- Anexo al contrato de trabajo suscrito por doña **Lisette Maldonado Cárdenas** de fecha 01 de marzo del año 2022;

I.18.- Documento de la Corporación Municipal de Punta Arenas denominado modificación de jornada, de fecha 06 de marzo del año 2023 correspondiente a doña **Lisette Maldonado Cárdenas**;

I.19.- Anexo de contrato de trabajo número 78/2021, de fecha 03 de mayo de 2021, entre Corporación Municipal de Punta Arenas y doña **Yasna Sánchez Vidal**;

I.20.- Modificación al contrato de trabajo profesional de la educación de doña **Yasna Sánchez Vidal**, de fecha 01 de diciembre de 2021;

I.21.- Modificación contrato de trabajo a docentes directivos establecimientos educacionales comuna de Punta Arenas de fecha 01 de marzo de 2022, entre Corporación Municipal de Punta Arenas y doña **Yasna Sánchez Vidal**;

I.22.- Documento denominado modificación al contrato individual de trabajo profesional de la educación de doña **Yasna Sánchez Vidal**;

I.23.- Documento de Corporación Municipal de Punta Arenas denominado modificación de jornada correspondiente a doña **Jessica Alderete Saldivia**, de fecha 01 de abril de 2021;

I.24.- Modificación de contrato de trabajo estatuto docente, ley 19070, de fecha 01 de marzo de 2021, de doña **Jessica Alderete Saldivia**;



I.25.- Modificación de contrato de docentes directivos establecimientos educacionales comuna de Punta Arenas de fecha 01 de marzo de 2019 entre Corporación Municipal de Punta Arenas y doña **Makarena Cárdenas Mancilla**;

I.26.- Modificación al contrato individual de trabajo profesional de la educación correspondiente a doña **Marlene Soto Coligiones**;

I.27.- Modificación contrato de trabajo estatuto docente, ley 19070, de 01 de marzo de 2022, de doña **Marlene Soto Coligiones**;

I.28.- Modificación contrato de trabajo estatuto docente, ley 19070, de 01 de marzo de 2023, de doña **Marlene Soto Coligiones**;

I.29.- Documento de Corporación Municipal de Punta Arenas denominado destinación de fecha 01 de marzo del año 2020, de doña **Águeda Rabanal Troncoso**;

I.30.- Documento de la Corporación Municipal de Punta Arenas denominado destinación correspondiente a doña **Águeda Rabanal Troncoso**;

I.31.- Modificación contrato de trabajo estatuto docente, ley 19070, de fecha 01 de marzo de 2021, de doña **Águeda Rabanal Troncoso**;

I.32.- Modificación de jornada de fecha 01 de mayo del año 2021, correspondiente a doña **Águeda Rabanal Troncoso**;

I.33.- Modificación al contrato individual de trabajo profesional de la educación de doña **Águeda Rabanal Troncoso**;

I.34.- Contrato de trabajo profesional de la educación de 06 de marzo del año 2023, entre Corporación Municipal de Punta Arenas y don **Marcial Miranda Otey**;

I.35.- Resolución interna número 04/262, de fecha 20 de abril del año 2015, de la Corporación Municipal de Punta Arenas, que fija porcentajes de asignación de responsabilidad directiva y reglamento de aplicación 2015.



II.- Testimonial, consistente en las declaraciones de las siguientes personas, quienes, previamente juramentadas en forma legal, señalaron en cada caso y en resumen, que:

II.1.- Rodrigo Andrés Parada Cárdenas, Director de Recursos Humanos de la Corporación Municipal de Punta Arenas, domiciliado en calle Jorge Montt N 890, Punta Arenas.

Ejercía su cargo desde diciembre de 2022. Antes de eso era profesional de apoyo en el área de remuneraciones, desde el 2009.

En cuanto a los docentes directivos, acorde a sus contratos, se les pagaba una asignación de responsabilidad que se calculaba con la asistencia y a matrícula del año anterior, de cada establecimiento, por lo que cada establecimiento tenía un diferente porcentaje.

Las asignaciones de responsabilidad eran los equipos directivos que reconocía el estatuto docente: Director, Inspector General y jefa de UTP. El porcentaje se calculaba con la asistencia y la matrícula del año anterior de cada colegio. Eso estaba establecido, parametrizado.

En cuanto al pago de otros funcionarios, con funciones distintas a las señaladas, como los profesionales de apoyo, según él, el estatuto docente no los reconocía. En la práctica apoyaban al equipo directivo, pero no les correspondía el pago de dicha asignación.

En cuanto a los que trabajaban en el CRA de las bibliotecas, no estaban comprendidos.

Cada Director tenía un nombramiento y éste nombraba a su equipo directivo, por resolución. A éstos les correspondía el pago, por el cargo, independiente de la persona. Cuando el director era nombrado, era por concurso público. Éste tenía las atribuciones de nombrar a su equipo directivo, lo que se hacía por resolución.



Eso se reflejaba en sus respectivas liquidaciones de remuneraciones y en sus contratos. Algunos tenían sus jornadas divididas, todo lo cual se detallaba en sus respectivas liquidaciones de remuneraciones. Dependía si era docente medio o docente básico, pues el sueldo base se calculaba según el valor de la hora, y sobre eso -con base el sueldo básico nacional-, se calculaba la asignación de responsabilidad.

Contrainterrogado por la parte demandante, agregó que:

El porcentaje ya estaba establecido en una resolución cuyo año desconocía, pero era la que usaban todos los años. La había dictado la CORMUPA, con el Secretario General de esa época, quien la había suscrito, no recordaba el año, pero podía ser el 2016 o 2017.

El equipo directivo estaba compuesto por Director, Inspector y Jefe de UTP. Los cargos que apoyaban al equipo directivo, no recordaba su denominación. En la carrera docente el orientador no había quedado como parte del equipo directivo.

La mayoría de la gente contratada que no eran directivos, eran todos docentes. O docentes básicos o docentes medios. Y sobre eso, la distribución que se les daba internamente, *quedaban ahí*, internamente. No había una resolución, respecto del cargo propiamente tal.

El encargado de convivencia dependía, en el organigrama, del equipo técnico pedagógico. Lo mismo los coordinadores CRA.

Inquirido por el tribunal, aclaró que:

Ellos tenían sobredotación docente, pues cuando un profesor pasaba a ser directivo era muy difícil que volviera al aula. Entonces, cuando el equipo directivo cambiaba, dichos docentes pasaban a ser apoyo al equipo directivo, sin volver al aula, pues sería un desmedro para ellos. Pasaban a apoyo al equipo directivo. Cuando se hizo el traspaso al SLEP, quedaron sorprendidos de la cantidad de profesionales, alrededor de 80, que ejercían funciones administrativas, sin ser



directivos ni profesores de aula, pues, a juicio del SLEP, no estaban contemplados en el estatuto docente.

II.2.- Rodrigo Marcelo Hernández Neicul, Ingeniero en Computación e Informática. domiciliado en calle Jorge Montt N°890, Punta Arenas.

Trabajaba actualmente en CORMUPA, en el depto. de RR HH, área de Remuneraciones, desde noviembre de 2010.

Había participado en la confección de liquidaciones de remuneraciones de los docentes.

A grandes rasgos, aquellos que tenían algún cargo directivo, se les pagaba sueldo base y diversas asignaciones, como de zona, del tramo docente y la asignación de responsabilidad, en algunos casos, cuando estaban contratados como docentes directivos. Esta última se calculaba en relación a las horas que tenía cada uno en dichas funciones, basado en un porcentaje parametrizado, estipulado en el sistema, por cada establecimiento y con base a una resolución que especificaba dichos porcentajes. Eso estaba sujeto a la matrícula de cada establecimiento.

Se pagaba dicha asignación de responsabilidad al Director de cada establecimiento, al Inspector General y al Jefe de UTP.

Siempre se había hecho así desde el 2015, cuando se dictó la resolución a la que se había referido. Nunca se dejó de pagar en esa forma a dichos cargos.

Contrainterrogado por la parte demandante, agregó que:

La resolución en cuestión establecía el porcentaje de la asignación de responsabilidad a recibir por cada cargo directivo, según la matrícula de cada establecimiento. La había dictado la jefatura de la CORMUPA, su equipo directivo.

OCTAVO: Que, en sus **observaciones a la prueba**, las partes expusieron lo conveniente a sus derechos.



La abogada de **la parte demandante** señaló que, de acuerdo al único *hecho a probar*, a su juicio se había establecido la asignación cuyo pago se pretendía, la que estaba en el artículo 51 del Estatuto Docente, que la establecía. La CORMUPA la había pagado conforme a una resolución interna del año 2015, que la fijó en porcentajes distintos e inferiores a los contemplados por la ley.

A los **Inspectores Generales** les correspondía legalmente el **20%**:

Los demandantes habían recibido, en cada caso, los siguientes: el N°1, un 11%; el N°8, un 14%; el N°9, un 17%; el N°13, un 8% y el N°21, entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 un 0% y entre enero y diciembre de 2023, un 14%.

A los **Jefes de UTP** también les correspondía legalmente el **20%**:

En este caso, los demandantes habían recibido los siguientes: el N°4, un 0%; el N°5, un 8%; el N°13, el N°16, el N°18 y el N°22, un 14%.

En cuanto a los demandantes cuya procedencia se había controvertido por la contraria:

La N°5, se controvertió que hubiese sido Jefa de UTP entre agosto de 2021 y febrero de 2023, en consecuencia, no existía controversia en relación al período no prescrito, cuyo pago se perseguía, y no se habían acompañado, por la contraria, los anexos detallando sus cargas horarias los años 2022 y 2023.

Lo mismo ocurría con la N°16, siendo lo controvertido si ejercía dicho cargo entre marzo de 2020 y febrero de 2021 (período prescrito). La contraria sí lo había reconocido respecto del período no prescrito y en la exhibición documental sí se había acompañado sus contratos de trabajo de 1 de marzo de 2022 y 1 de marzo de 2023, constando en ambos dicha destinación, como Jefa de UTP, en el Liceo Politécnico.

En cuanto a la N°4, pidió se hiciera efectivo el apercibimiento ya referido -por la no exhibición de los anexos con el detalle de su asignación horaria-, lo que debía unirse a la declaración prestada por el testigo Víctor Lara Yáñez, en el sentido de que no siempre sus contratos se actualizaban para reflejar su real



función, pues ello pasaba por la designación que se hacía al interior del respectivo establecimiento (educacional).

En relación a los **Orientadores**, les correspondía legalmente el **15%**:

El demandante N°10, había recibido un 12%; el N°14, un 9%; el N°15, un 6%; el N°17, entre marzo y diciembre de 2023 un 0%; y el N°20, un 9%.

A los **Encargados de Convivencia**, les correspondía, asimismo, un **15%**:

El demandante N°2, había recibido, entre marzo y diciembre de 2023, un 6%; el N°6, entre abril de 2022 y febrero de 2023, un 0%, en marzo de 2023 y entre mayo y diciembre de 2023, un 10%; el N°19, entre marzo y diciembre de 2023, un 8%.

Precisó que, respecto de la demandante N°6, CORMUPA había cuestionado el ejercicio de su cargo d, pero conforme los documentos de la contraria -en folio 53 y páginas 43 y 44-, aparecía una modificación de su contrato, entre el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022, designándola en tal cargo en la Escuela F-15, Patagonia. Existían además contratos acompañados -los de 1 de marzo de 2021 y de 1 de enero de 2023-, que señalaban que había servido dicho cargo, entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de diciembre de 2023, en la referida escuela, con una jornada de 37 horas.

El demandante N°19, conforme al contrato de marzo de 2023 (en folio 58, pág. 30), se encontraba ilegible su jornada, pero se señalaba la designación en dicha función. Debía unirse al testimonio de doña Alicia Viidal Yáñez, quien había mencionado que éste sí la había cumplido, por 37 horas, en el Liceo Politécnico.

A las **Coordinadoras de los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA)**, les correspondía un **15%**:

Las demandantes números 11 y 12, no habían recibido pago alguno por dicha asignación. Respecto de la N°11, se había acompañado el anexo de teletrabajo y debía hacerse efectivo el apercibimiento por la no exhibición del documento conteniendo su distribución horaria. Sus testigos habían acreditado



que sí se desempeñó en tal calidad desde 2018 en adelante en la escuela Bernardo O'Higgins.

En relación a la N°12, la demandada había reconocido su cumplimiento de dichas funciones desde marzo 2022 en adelante, esto es, el período no prescrito, por lo que no había en realidad controversia sobre el particular. Se había refrendado en todo caso el cumplimiento de su función con documentos: la modificación de contrato en folio 54, páginas 31, 32 y 33, donde se la designaba para cumplirla, por 40 horas, en el Liceo Luis Alberto Barrera, entre marzo de 2022 y diciembre de 2023.

A las **Coordinadoras de Jornada Vespertina**, les correspondía un **15%**:

A la demandante N°3, nada se le había pagado y, conforme al documento acompañado, en folio 54 (páginas 11, 12 y 13), la modificación de su contrato de trabajo de 1 de marzo de 2022, se la había designado en dicha función, con 44 horas, en el Liceo Armando Quezada Acharán, sin que existiera otro documento dando cuenta de una modificación posterior.

En relación al derecho a percibir la asignación de responsabilidad por las Coordinadoras CRA y por la Coordinadora de Jornada Vespertina, debía tenerse presente oficio ordinario N°07/4256 de la División Jurídica del Ministerio de Educación, en que se señalaba que éstos tenían carácter técnico pedagógico, conforme los dictámenes allí citados de la Contraloría General De La República.

Reiteró su petición de que se acogiera la demanda.

A su turno, la abogada de **la parte demandada** señaló que, efectivamente, se había fijado un solo punto de prueba, acotado, referido al pago de la asignación demandada.

No reiteró, por economía procesal, lo señalado en la contestación de la demanda, en cuanto a su postura de defensa.



Sin embargo, señaló que, con la prueba documental rendida, se había probado lo allí referido, en atención a las fechas a partir de las cuales los actores pudieron haber desempeñado los cargos señalados en la demanda.

Sin perjuicio de ello, señaló que el oficio del Ministerio de Educación se había respondido lo que se le había consultado: cuáles eran las funciones, cuál era la naturaleza de las funciones desempeñadas por los demandantes. Y si era de naturaleza directiva o técnico-pedagógica.

Así, la respuesta hacía alusión estrictamente a lo consultado, en la forma que había indicado (citando el texto del documento referido). Su parte, no era un DAEM, era una CORMUPA, teniendo diferencias en cuanto a normativa y función. La pregunta había sido abierta y la respuesta específica. No necesariamente era aplicable, en consecuencia, a la parte demandada.

Respecto al pago realizado, efectivamente se había hecho conforme a la resolución dictada el año 2015, a la que se refirió. Los testigos presentados así lo habían confirmado. Eso se podía confirmar con las liquidaciones de remuneraciones acompañadas. No le quedaba más que señalar que era efectivo lo indicado en su contestación. En caso de acreditarse algún incumplimiento o pago incompleto, se debía considerar el sueldo base correspondiente a las horas desempeñadas en la respectiva función por cada funcionario.

Consideraba que los cargos que se debían pagar conforme al Estatuto Docente, eran los señalados expresamente por su artículo 50 -Director, Inspector General y Jefe de UTP-, pero no a todos los cargos demandados.

Pidió que todo lo anterior se considerara para efectos de cálculo y fallo.

NOVENO: Que, a juicio del tribunal, **el conflicto** sometido al conocimiento y decisión de este tribunal, **tiene dos aspectos, uno de derecho y otro de hecho.**

La controversia estrictamente jurídica, consiste, en primer lugar, en determinar si los cargos detentados por los demandantes -inspector general, jefe de UTP, orientador, encargado de convivencia, coordinador CRA (Centro de



Recursos de Aprendizaje) y **coordinador jornada vespertina**- **tenían o no derecho a percibir una asignación de responsabilidad, conforme al Estatuto Docente.**

Para resolverla es necesario remitirse a lo dispuesto por su artículo 8°, que consigna que: **“Las funciones técnico-pedagógicas** son aquellas de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica para cada función, se ocupan respectivamente de los siguientes campos de apoyo o complemento de la docencia: **orientación** educacional y vocacional, **supervisión** pedagógica, **planificación** curricular, **evaluación del aprendizaje**, investigación pedagógica, **coordinación de procesos de perfeccionamiento docente** y **otras análogas** que por decreto reconozca el Ministerio de Educación, previo informe de los organismos competentes”.

Como se puede apreciar, respecto de los **inspectores generales**, por una parte y de los **jefes de UTP y orientadores**, por la otra, no hay mayor discusión, correspondiendo efectivamente al ejercicio de funciones directivas los primeros y técnico-pedagógicas los segundos, conforme se desprende expresamente de los términos empleados por la normativa antes transcrita.

Respecto de los demás -los **encargados de convivencia, los coordinadores CRA y los coordinadores de jornada vespertina**, las normas aludidas no son tan claras, sin perjuicio del artículo 8° ya citado, que se refiere a labores de *evaluación del aprendizaje* y de *coordinación* (de procesos de perfeccionamiento docente), describiendo funciones similares a las desarrolladas por los dos últimos cargos, *coordinadores CRA* y *coordinadores de jornada vespertina*; ello, sin perjuicio de la fórmula amplia empleada al final del artículo, *otras análogas que por decreto reconozca el Ministerio de Educación*.

En este punto entonces, interpretando las normas, es necesario recurrir al principio *pro operario*, considerando así que corresponde considerar a dichos cargos como unos que efectivamente ejercen *funciones técnico-pedagógicas*, sin perjuicio de que cualquier duda al respecto, se estima zanjada con base en el oficio ordinario N°07/4526 de 21 de agosto de 2024, emitido por el Jefe de la



División Jurídica del Ministerio de Educación, el que, respondiendo a la consulta formulada por el tribunal, “cuál es la naturaleza de las funciones de los cargos **Coordinador Jornada Vespertina y Coordinador Centros de Recursos para el aprendizaje**, indicando si esta naturaleza es directiva o técnico-pedagógica” informó que, no obstante no existir una definición legal para el primer cargo, la Contraloría General de la República ha señalado que **dicha función tiene carácter técnico pedagógico**, mediante el Dictamen N°4807 de 2004.

Además, se informó que dicho ente contralor señaló -en los dictámenes N°13153 de 2002, N°73026 de 2015, N°3484 de 2018, N°29813 de 2018 y E5644 de 2020-, que “En las condiciones anotadas, es conveniente indicar que **son de índole técnico-pedagógica** las contrataciones para ejercer las labores de **encargado de convivencia escolar, coordinador del centro de recursos...**”, por lo que se emplea el mismo sentido al cargo de **coordinador de Centro de Recursos para el Aprendizaje**”.

Opinión que el tribunal comparte, estimando en definitiva que las funciones desempeñadas por los encargados de convivencia escolar, coordinadores de jornada vespertina y coordinadores CRA, son, efectivamente, de naturaleza técnico-pedagógica.

DÉCIMO: Que, dilucidado lo consignado en el basamento anterior en forma afirmativa, y siguiendo con la controversia estrictamente jurídica, en segundo lugar, corresponde **determinar si cuando la demandada efectuó pagos a los actores, por concepto de asignación de responsabilidad, se ajustó a derecho.**

Aquí, **el artículo 51 del DFL 1 de 1996 del Ministerio de Educación**, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican -en adelante, el “**Estatuto Docente**”-, establece:

“Las asignaciones de responsabilidad directiva y de responsabilidad técnico-pedagógica corresponderán a los profesionales de la educación que sirvan funciones superiores **y alcanzarán los siguientes porcentajes mínimos**



calculados sobre la remuneración básica mínima nacional: un 25% en el caso de los directores de establecimientos educacionales, **un 20% en el caso de otros directivos y de los Jefes de unidades técnico-pedagógicas, y un 15% en el caso de otro personal de las unidades técnico-pedagógicas.**

Para determinar el porcentaje, el Departamento de Administración de la Educación o la Corporación Educacional respectiva tendrá en cuenta, entre otras, la matrícula y la jerarquía interna de las funciones docente directivas y técnico-pedagógicas de la dotación de cada establecimiento.

Tratándose de establecimientos educacionales con una matrícula total de entre 400 y 799 alumnos, la asignación para su director será de un 37,5%. Si el establecimiento tuviese una matrícula total de 800 a 1.199 alumnos, dicha asignación será de un 75% y si tuviese una matrícula total de 1.200 o más alumnos, será de 100%. Con todo, en el caso de establecimientos educacionales con una matrícula total de hasta 150 alumnos la asignación de responsabilidad directiva y de responsabilidad técnico-pedagógica no podrá exceder los porcentajes establecidos en el inciso primero. Tratándose de establecimientos educacionales con una matrícula superior a 150 alumnos e inferior a 400, la asignación del director no podrá exceder de 37,5%.

La asignación establecida en el inciso anterior, se calculará anualmente considerando el promedio de la asistencia media del año anterior que reciba subvención escolar”.

Por su parte, la referida **remuneración básica mínima nacional** está definida en el **artículo 35** del mismo estatuto, que consigna: “Los profesionales de la educación tendrán derecho a una remuneración básica mínima nacional para cada nivel del sistema educativo, en conformidad a las normas que establezca la ley, a las asignaciones que se fijan en este Estatuto, y sin perjuicio de las que se contemplen en otras leyes.



Se entenderá por remuneración básica mínima nacional, el producto resultante de multiplicar el valor mínimo de la hora cronológica que fije la ley por el número de horas para las cuales haya sido contratado cada profesional".

En relación a esta segunda interrogante, consta en autos que **la demandada, cada vez que efectuó, a alguno de los actores, el pago asociado a una asignación de responsabilidad por el ejercicio de una función directiva o técnico-pedagógica -durante el período no cubierto por la excepción de prescripción acogida en estos autos -vale decir, entre abril de 2022 y diciembre de 2023-, lo hizo con base en la resolución interna N°04/262 de 20 de abril de 2015 de la misma CORMUPA, que fijó dicha asignación para cada uno de los establecimientos educacionales dependientes de la Corporación, que les correspondía percibir a los profesionales de la educación que sirvieran dichas funciones superiores.**

En consecuencia, **aplicando las normas** atinentes al caso, ya referidas, fluye que **la demandada, habiéndose encontrado obligada a pagar a los actores, como parte de sus remuneraciones, las respectivas asignaciones de responsabilidad asociadas a los cargos que respectivamente ejercían, por unos montos mínimos -fijados en el Estatuto Docente- ascendentes al 20% de la remuneración básica mínima nacional, en el caso de los inspectores generales y Jefes de UTP, y al 15%, en el caso de los demás actores -orientadores, encargados de convivencia, coordinadores CRA y coordinadores de educación vespertina-, cada vez que lo hizo por un monto inferior a dichos mínimos, no cumplió a cabalidad con dicha obligación legal.**

Si bien para pagar como lo hizo se basó en los porcentajes fijados en la resolución por ella misma dictada el año 2015, ello no la exoneraba de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la ley, que fijaba porcentajes mínimos superiores a aquellos que unilateralmente determinó.

Así, **en la medida que no se acredite el pago de los conceptos demandados, durante los períodos que efectivamente hayan desempeñado los actores las funciones** tantas veces referidas **(siempre dentro de aquél no prescrito, conforme**



la excepción acogida), **forzosamente habrá de acogerse la demanda en cuanto exige dichos pagos**, esto es, **la diferencia entre el porcentaje mínimo que en cada caso exigía la ley y aquél que unilateralmente fijó en la resolución del año 2015, ya especificada**, cuyo monto total, en cada caso particular, deberá determinarse en la etapa de cumplimiento del presente fallo, y pagarse, por tratarse de remuneraciones, con el reajuste e intereses que contempla el artículo 63 del Código del Trabajo.

UNDÉCIMO: Que, a continuación, y ahora en relación a **la controversia relativa a los hechos**, corresponde determinar si **resultó acreditado en autos**, respecto de cada uno de los actores, **el hecho a probar** consignado en el basamento Quinto, ***“La efectividad de que la demandada pagó íntegramente las asignaciones de responsabilidad directiva y/o técnico-pedagógicas en el período comprendido entre abril de 2022 y diciembre de 2023”***.

Encontrándose pendiente de resolución lo referido a la *exhibición documental* solicitada en su oportunidad por la parte demandante, en el sentido de hacer efectivo el apercibimiento contemplado en el artículo 453 N°5 del Código del Trabajo, por la no presentación en la audiencia de juicio, por parte de la demandada, de los ***anexos de contratos de trabajo distribución horaria, correspondientes al período comprendido entre los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023, de todos los demandantes***, es necesario dejar asentado que, conforme lo dispone el artículo 11 del Código del Trabajo, era necesario que, en caso de haber existido una modificación contractual, asignando una función *directiva* o *técnico-pedagógica* a alguno de los actores, la demandada, efectivamente, habría estado obligada a consignar ello por escrito. Entonces, en la medida que dicha función alegada en la demanda, no sea derechamente controvertida por la demandada, se hará efectivo el apercibimiento solicitado; incluso en caso de ser lo anterior controvertido, de haber algún indicio de prueba en contrario, también se hará efectivo el referido apercibimiento, todo ello, según se analizará a continuación, caso a caso. Para ser absolutamente claro, sólo no se hará valer el apercibimiento en caso de que, siendo ello controvertido por la



demandada, no exista ninguna prueba, ni aún indiciaria, de la modificación contractual específica alegada.

Apreciada la prueba rendida por las partes, esto es, la documental, testimonial, el oficio y la exhibición documental, detallados en los considerandos Sexto y Séptimo, **de conformidad con las reglas de la sana crítica** -en concordancia además con el **hecho conforme**, fijado en la audiencia preparatoria, consignado también en el basamento Quinto-, **resultaron establecidos los siguientes hechos:**

1.- Respecto de LÍDICE YESSICA CABRERA PIÑONES:

Doña Lídice prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Liceo Sara Braun, donde ejerció como inspectora general durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función directiva, dentro de sus remuneraciones se le pagó una asignación de responsabilidad, que ascendió a un 11% de la remuneración base mínima nacional.

Así fluyó, sin contradicciones, de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos.

2- Respecto de ALEJANDRO ENRIQUE SANHUEZA AGUAYO:

Don Alejandro prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Escuela Elba Ojeda Gómez, donde ejerció como encargado de convivencia durante los meses de marzo a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones se le pagó una asignación de responsabilidad, que ascendió a un 6% de la remuneración base mínima nacional.



Así fluyó, sin contradicciones, de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos.

3.- Respetto de MARÍA ESTER SZIGETHI CAMPOS:

Doña María Ester prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Liceo A-6 Armando Quezada, donde ejerció como coordinadora vespertina durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones no se le pagó una asignación de responsabilidad.

Así fluyó, sin contradicciones, de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos.

4.- Respetto de LISETTE JOANA MALDONADO CÁRDENAS:

Doña Lisette prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Colegio Andino, donde ejerció como docente medio durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función, que no es directiva ni técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones no se le pagó una asignación de responsabilidad.

Así fluyó del contraste entre lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio. Lo anterior, pues la demandada negó que se hubiese desempeñado en tal calidad -no pudiendo tenerse ello por tácitamente admitido-, calidad que además no figura expresamente en las liquidaciones referidas, sin que se hubiese aportado prueba alguna distinta, destinada a acreditar la realización de la función de Jefe de UTP alegada en la demanda, no resultando así procedente hacer valer el apercibimiento solicitado por la abogada demandante, en relación a la



exhibición documental de las *modificaciones horarias*, no cumplida por la demandada.

5.- Respecto de YASNA MARICEL SÁNCHEZ VIDAL:

Doña Yasna prestó servicios para la *Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA*, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Escuela Elba Ojeda Gómez, donde ejerció como jefe de UTP durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función directiva, dentro de sus remuneraciones se le pagó una *asignación de responsabilidad*, que ascendió a un 8% de la *remuneración base mínima nacional*.

Así fluyó, sin contradicciones, de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos.

6.- Respecto de JESSICA MAGALY ALDERETE SALDIVIA:

Doña Jessica prestó servicios para la *Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA*, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Escuela F-15 Patagonia, donde ejerció como *encargada de convivencia* durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023, por 37 de sus 44 horas semanales de jornada de trabajo. Por el cumplimiento de dicha función técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones se le pagó una *asignación de responsabilidad*, únicamente a partir del mes de marzo de 2023, que ascendió a un 10% de la *remuneración base mínima nacional*.

Así fluyó de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, si bien de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos, aparecen como no pagados dichos conceptos de septiembre a noviembre de 2022, lo cierto es que la modificación a su contrato de trabajo de 1 de abril de 2021, que asignó dicha función y por las horas



referidas, no aparece modificado con posterioridad, permitiendo presumir la continuidad en el desarrollo de la misma.

7.- Respecto de MACKARENA MABEL CÁRDENAS MANCILLA:

Doña Mackarena prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Escuela D-24, 18 de Septiembre, donde ejerció como jefe de UTP durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función directiva, dentro de sus remuneraciones se le pagó una asignación de responsabilidad, que ascendió a un 14% de la remuneración base mínima nacional.

Así fluyó, sin contradicciones, de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos.

8.- Respecto de VERÓNICA MABEL SÁNCHEZ OVANDO:

Doña Verónica prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Escuela Padre Hurtado, donde ejerció como inspectora general durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función directiva, dentro de sus remuneraciones se le pagó una asignación de responsabilidad, que ascendió a un 14% de la remuneración base mínima nacional.

Así fluyó, sin contradicciones, de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos.

9.- Respecto de JORGE ALEJANDRO BEATTIE OJEDA:

Don Jorge prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Liceo B-2, Luis Alberto Barrera, donde ejerció



como *inspector general* durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función directiva, dentro de sus remuneraciones se le pagó una *asignación de responsabilidad*, que ascendió a un 17% de la *remuneración base mínima nacional*.

Así fluyó, sin contradicciones, de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos.

10.- Respetto de MARÍA TATIANA NAVARRO HERNÁNDEZ:

Doña María Tatiana prestó servicios para la *Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA*, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Instituto Superior de Comercio, donde ejerció como *orientadora* durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones se le pagó una *asignación de responsabilidad*, que ascendió a un 12% de la *remuneración base mínima nacional*.

Así fluyó, sin contradicciones, de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos.

11.- Respetto de YOLANDA ERICA NAVARRO LEIVA:

Doña Yolanda prestó servicios para la *Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA*, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Escuela D-17, Bernardo O'Higgins, donde ejerció como *coordinadora pedagógica CRA* durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones no se le pagó una *asignación de responsabilidad*.

Así fluyó de lo aseverado en la demanda, que si bien fue contradicho por la demandada y no constó en las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio -donde figura solo como docente básico-, finalmente fue refrendado por los



testimonios de las profesoras Alicia Vidal Yáñez y María Isabel Espejo Aguayo, colegas de dicha actora en el establecimiento en el que se desempeñaba, quienes, dando razón de sus dichos, estuvieron contestes en que ésta había cumplido dicha función allí desde el año 2018 a la fecha, de tal suerte que, a su respecto, se hace valer el apercibimiento dispuesto por el artículo 453 N°5 del Código del Trabajo, al no haberse acompañado el anexo de contrato con dicha designación.

12.- Respecto de MARLENE SOFÍA SOTO COLIGIONES:

Doña Marlene prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Liceo B-2 Luis Alberto Barrera, donde ejerció como coordinadora pedagógica CRA, durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones no se le pagó una asignación de responsabilidad.

Así fluyó, sin contradicciones de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos -quienes estuvieron de acuerdo en ello- y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que no constan los pagos respectivos y sí el desempeño de la referida función, durante el período indicado.

13.- Respecto de OLIVERIO EDUARDO GARAY CÁRDENAS:

Don Oliverio prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimientos educacionales bajo su dependencia: en el Politécnico Raúl Silva Henríquez, donde ejerció como inspector general durante los meses de abril y mayo de 2022. Por el cumplimiento de dicha función directiva, dentro de sus remuneraciones se le pagó una asignación de responsabilidad, que ascendió a un 8% de la remuneración base mínima nacional.



Así fluyó de lo aseverado en la demanda, no contradicho por la demandada en su contestación y, sin perjuicio de no haberse acompañado al juicio las liquidaciones de remuneraciones referidas a los meses de abril y mayo de 2022, constando que en todas las anteriores -desde marzo de 2019 hasta febrero de 2022-, sí aportadas al juicio, figuran los pagos efectuados por dicho concepto y sus montos, ello permite presumir que se continuó así haciendo en los meses invocados en la acción incoada.

14.- Respecto de JUAN EDMUNDO CONCHA SOTO:

Don Juan prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Escuela E-23, Pedro Pablo Lemaitre, donde ejerció como orientador durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones se le pagó una asignación de responsabilidad, que ascendió a un 9% de la remuneración base mínima nacional.

Así fluyó, sin contradicciones, de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos.

15.- Respecto de CARMEN GLORIA GUENCHUR CHIGUAY:

Doña Carmen Gloria prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Escuela G-26, Pedro Sarmiento de Gamboa, donde ejerció como orientadora durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones se le pagó una asignación de responsabilidad, que ascendió a un 6% de la remuneración base mínima nacional.



Así fluyó, sin contradicciones, de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos.

16.- Respecto de ÁGUEDA IVONNE RABANAL TRONCOSO:

Doña Águeda prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez, donde ejerció como jefe de UTP durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones se le pagó una asignación de responsabilidad, que ascendió a un 14% de la remuneración base mínima nacional.

Así fluyó, sin contradicciones, de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos.

17.- Respecto de XIMENA PAZ JABAT TWYMAN:

Doña Ximena prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Escuela G-26, Pedro Sarmiento de Gamboa, donde ejerció como orientadora durante los meses de marzo a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones no se le pagó una asignación de responsabilidad.

Así fluyó, sin contradicciones, de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos.

18.- Respecto de DANIELA ALEJANDRA CÁRCAMO MANSILLA:

Doña Daniela prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el



establecimiento educacional bajo su dependencia, Escuela E-23, Pedro Pablo Lemaitre, donde ejerció como jefe de UTP durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones se le pagó una asignación de responsabilidad, que ascendió a un 14% de la remuneración base mínima nacional.

Así fluyó, sin contradicciones, de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos.

19.- Respecto de MARCIAL LEONARDO MIRANDA OTEY:

Don Marcial prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez, donde ejerció como encargado de convivencia, durante los meses de marzo y diciembre de 2023, con una jornada de 37 horas semanales. Por el cumplimiento de dicha función técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones se le pagó una asignación de responsabilidad, que ascendió a un 8% de la remuneración base mínima nacional.

Así fluyó de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos. Si bien en estos últimos documentos, además del contrato acompañado por la demandada -su documento N°34-, aparece cumpliendo solo una jornada de 33 horas, esto último fue controvertido por la testigo de la parte demandante Alicia Vidal Yáñez, quien refirió que en realidad cumplía 37 horas (semanales) en dicha función, testigo que dio razón de sus dichos, siendo éstos contestes con el testigo Víctor Lara Yáñez, también presentado por dicha parte y con el testigo de la propia demandada, Rodrigo Hernández Neicul -quien se desempeñó como Director de Recursos Humanos de la CORMUPA-, en el sentido de que muchas veces la distribución de la jornada, al interior de los establecimientos de su dependencia, no siempre se reflejaba en una modificación contractual ni, consecuentemente, en las respectivas



liquidaciones de remuneraciones. Por eso, se estará a la jornada de 37 horas semanales, por sobre las 33 indicadas en la documentación ya descrita.

20.- Respecto de GEORGINA SELMIRA BARRIENTOS MIMIZA:

Doña Georgina prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Escuela F-15, Patagonia, donde ejerció como *orientadora* durante los meses de abril de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones se le pagó una *asignación de responsabilidad*, que ascendió a un 9% de la remuneración base mínima nacional.

Así fluyó de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio.

21.- Respecto de MANUEL ALEJANDRO ALCAYAGA VERA:

Don Manuel prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Escuela F-15 Patagonia, donde ejerció como *inspector general* durante los meses de octubre de 2022 a diciembre de 2023. Por el cumplimiento de dicha función directiva, dentro de sus remuneraciones se le pagó una *asignación de responsabilidad*, que ascendió a un 14% de la remuneración base mínima nacional, únicamente a partir de enero de 2023.

Así fluyó de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos pues, si bien de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, sólo consta los pagos y sus montos efectuados por dicho concepto a partir de enero de 2023, la demandada no controvertió expresamente que se hubiese desempeñado en dicha calidad durante el período demandado, por lo que se tendrá ello por tácitamente admitido, conforme a lo dispuesto en el penúltimo inciso del número 1 del artículo 453 del Código del Trabajo.

22.- Respecto de SANDRA MABEL ÁLVAREZ PÉREZ:



Doña Sandra prestó servicios para la Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor, CORMUPA, en el establecimiento educacional bajo su dependencia, Escuela F-15 Patagonia, donde ejerció como jefe de UTP durante los meses de abril de 2022 a febrero de 2023. Por el cumplimiento de dicha función técnico-pedagógica, dentro de sus remuneraciones se le pagó una asignación de responsabilidad, que ascendió a un 14% de la remuneración base mínima nacional.

Así fluyó, sin contradicciones, de lo aseverado por ambas partes en sus respectivos libelos y, fundamentalmente, de las liquidaciones de remuneraciones aportadas al juicio, en que constan los referidos pagos y sus montos, pero solo hasta febrero de 2023. No obstante lo alegado en sus observaciones a la prueba por la abogada demandante, en el sentido de que estimó se había acreditado el período que incluye los meses de marzo a diciembre de 2023, lo cierto es que, aun cuando así pudiese estimarse, **en su demanda sólo pidió su pago hasta el mes de febrero de 2023**, no pudiendo conceder el tribunal más de lo expresamente pedido, so pena de incurrir en el vicio de *ultra petita*.

23.- Cada vez que la demandada efectuó el pago de los porcentajes señalados en los puntos anteriores, por concepto de las respectivas asignaciones de responsabilidad, a los actores y durante los períodos allí indicados, lo hizo con base en la resolución interna N°04/262 de 20 de abril de 2015 de la misma CORMUPA, que fijó dicha asignación para cada uno de los establecimientos educacionales dependientes de la Corporación que les correspondía percibir a los profesionales de la educación que sirvieran funciones superiores Directivo Docentes en calidad de titulares y funciones técnico-pedagógicas.

DUODÉCIMO: Que, recapitulando, habiéndose acreditado que la demandada **no pagó íntegramente, con base en los conceptos demandados, la asignación de responsabilidad que se encontraba obligada a pagar a los actores, durante los períodos que efectivamente desempeñaron las funciones tantas veces referidas (siempre dentro del período no prescrito, conforme la excepción acogida), forzosamente habrá de acogerse la demanda en cuanto**



exige dichos pagos, esto es, **la diferencia entre el porcentaje mínimo que en cada caso exigía la ley y aquél que unilateralmente fijó en la resolución del año 2015, ya especificada**, cuyo monto total, en cada caso particular, deberá determinarse en la etapa de cumplimiento del presente fallo, y pagarse, por tratarse de remuneraciones, con el reajuste e intereses que contempla el artículo 63 del Código del Trabajo.

Lo anterior, con la salvedad de la actora consignada en el número 4 del considerando que antecede, por las razones allí explicadas.

DÉCIMO TERCERO: Que, **las restantes pruebas rendidas** en el juicio, en nada alteran las conclusiones arribadas precedentemente, de manera que no se analizarán en detalle, por inoficioso.

DÉCIMO CUARTO: Que, **no se condenará a la parte demandada al pago de las costas** de la causa por no haber resultado completamente vencida -al haberse acogido la excepción de prescripción por ella opuesta-, debiendo cada parte pagar las propias.

Por estas consideraciones **Y, VISTO, ADEMÁS**, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 41, 42, 43, 54 y siguientes, 63, 420, 425 y siguientes, 453 y siguientes y 510 del Código del Trabajo, artículos 7°, 8°, 35, 51 y demás pertinentes del DFL N°1 de 1996 del Ministerio de Educación, que *fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican*, artículos 48, 49, 2492 y siguientes del Código Civil, **SE DECLARA QUE:**

I.- SE ACOGE LA DEMANDA interpuesta en contra de la **Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, sólo en cuanto se condena a la parte demandada a pagar a los siguientes actores, por concepto de remuneraciones impagas** -el porcentaje no pagado de la *asignación de responsabilidad* que en cada caso les correspondía percibir con base en las funciones *directivas o técnico-pedagógicas* ejercidas por éstos, conforme al artículo 51 del DFL N°1 DFL 1 de 1996 del Ministerio de Educación,



también denominado "Estatuto Docente"-, por los períodos, horas de jornada semanal y porcentajes (siempre dentro del período no cubierto por la excepción de *prescripción* acogida en la audiencia preparatoria) que en cada caso se indica:

I.1.- A LÍDICE YESSICA CABRERA PIÑONES, por todo el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y diciembre de 2023, la suma equivalente a un **9% de la remuneración básica mínima nacional vigente durante el mismo período** (suma equivalente a la diferencia entre el 20% que debía percibir como *inspectora general* y el 11% que efectivamente le fue pagado);

I.2.- A ALEJANDRO ENRIQUE SANHUEZA AGUAYO, por todo el período comprendido entre los meses de marzo y diciembre de 2023, la suma equivalente a un **9% de la remuneración básica mínima nacional vigente durante el mismo período** (suma equivalente a la diferencia entre el 15% que debía percibir como *encargado de convivencia* y el 6% que efectivamente le fue pagado);

I.3.- A MARÍA ESTER SZIGETHI CAMPOS, por todo el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y diciembre de 2023, la suma equivalente a un **15% de la remuneración básica mínima nacional vigente durante el mismo período** (suma correspondiente a lo que debía percibir como *coordinadora vespertina* y que no le fue pagada);

I.4.- A YASNA MARICEL SÁNCHEZ VIDAL, por todo el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y diciembre de 2023, la suma equivalente a un **12% de la remuneración básica mínima nacional vigente durante el mismo período** (suma equivalente a la diferencia entre el 20% que debía percibir como *jefe de UTP* y el 8% que efectivamente le fue pagado);

I.5.- A JESSICA MAGALY ALDERETE SALDIVIA, sobre la base de una jornada de **37 horas semanales**, por el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y febrero de 2023, la suma equivalente a un **15% de la remuneración básica mínima nacional vigente durante el mismo período** (suma correspondiente a lo que debía percibir como *encargada de convivencia* y que no le fue pagada en



lo absoluto) y, por el período de marzo a diciembre de 2023, la suma equivalente a un 5% de la *remuneración básica mínima nacional* vigente durante el mismo período (suma equivalente la diferencia entre el 15% que debía percibir como encargada de convivencia y el 10% que efectivamente le fue pagado durante ese período específico);

I.6.- A MACKARENA MABEL CÁRDENAS MANCILLA, por todo el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y diciembre de 2023, la suma equivalente a un 6% de la *remuneración básica mínima nacional* vigente durante el mismo período (suma equivalente a la diferencia entre el 20% que debía percibir como jefe de UTP y el 14% que efectivamente le fue pagado);

I.7.- A VERÓNICA MABEL SÁNCHEZ OVANDO, por todo el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y diciembre de 2023, la suma equivalente a un 6% de la *remuneración básica mínima nacional* vigente durante el mismo período (suma equivalente la diferencia entre el 20% que debía percibir como inspectora general y el 14% que efectivamente le fue pagado);

I.8.- A JORGE ALEJANDRO BEATTIE OJEDA, por todo el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y diciembre de 2023, la suma equivalente a un 3% de la *remuneración básica mínima nacional* vigente durante el mismo período (suma equivalente a la diferencia entre el 20% que debía percibir como inspector general y el 17% que efectivamente le fue pagado);

I.9.- A MARÍA TATIANA NAVARRO HERNÁNDEZ, por todo el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y diciembre de 2023, la suma equivalente a un 3% de la *remuneración básica mínima nacional* vigente durante el mismo período (suma equivalente a la diferencia entre el 15% que debía percibir como orientadora y el 12% que efectivamente le fue pagado);

I.10.- A YOLANDA ERICA NAVARRO LEIVA, por todo el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y diciembre de 2023, la suma equivalente a un 15% de la *remuneración básica mínima nacional* vigente durante el mismo



período (suma correspondiente a lo que debía percibir como *coordinadora pedagógica CRA* y que no le fue pagada);

I.11.- A MARLENE SOFÍA SOTO COLIGIONES, por todo el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y diciembre de 2023, la suma equivalente a un 15% de la *remuneración básica mínima nacional vigente* durante el mismo **período** (suma correspondiente a lo que debía percibir como *coordinadora pedagógica CRA* y que no le fue pagada);

I.12.- A OLIVERIO EDUARDO GARAY CÁRDENAS por el período correspondiente a los meses de abril y mayo de 2022, la suma equivalente a un 12% de la *remuneración básica mínima nacional vigente* durante el mismo **período** (suma equivalente a la diferencia entre el 20% que debía percibir como *inspector general* y el 8% que efectivamente le fue pagado),

I.13.- A JUAN EDMUNDO CONCHA SOTO, por todo el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y diciembre de 2023, la suma equivalente a un 6% de la *remuneración básica mínima nacional vigente* durante el mismo **período** (suma equivalente a la diferencia entre el 15% que debía percibir como *orientador* y el 9% que efectivamente le fue pagado);

I.14.- A CARMEN GLORIA GUENCHUR CHIGUAY, por todo el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y diciembre de 2023, la suma equivalente a un 9% de la *remuneración básica mínima nacional vigente* durante el mismo **período** (suma equivalente a la diferencia entre el 15% que debía percibir como *orientadora* y el 6% que efectivamente le fue pagado);

I.15.- A ÁGUEDA IVONNE RABANAL TRONCOSO, por todo el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y diciembre de 2023, la suma equivalente a un 6% de la *remuneración básica mínima nacional vigente* durante el mismo **período** (suma equivalente a la diferencia entre el 20% que debía percibir como *jefe de UTP* y el 14% que efectivamente le fue pagado);

I.16.- A XIMENA PAZ JABAT TWYMAN, por todo el período comprendido entre los meses de marzo a diciembre de 2023, la suma equivalente a un 15% de la



remuneración básica mínima nacional vigente durante el mismo período (suma correspondiente a lo que debía percibir como *orientadora* y que no le fue pagada en lo absoluto);

I.17.- A DANIELA ALEJANDRA CÁRCAMO MANSILLA, por todo el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y diciembre de 2023, la suma equivalente a un 6% de la **remuneración básica mínima nacional vigente durante el mismo período** (suma equivalente a la diferencia entre el 20% que debía percibir como *jefe de UTP* y el 14% que efectivamente le fue pagado);

I.18.- A MARCIAL LEONARDO MIRANDA OTEY, sobre la base de una jornada de 37 horas semanales -y no de 33 horas, como se consideró por la demandada para pagarle-, por el período comprendido entre los meses de marzo y diciembre de 2023, la suma equivalente a un 7% de la **remuneración básica mínima nacional vigente durante el mismo período** (suma equivalente a la diferencia entre el 15% que debía percibir como *encargado de convivencia* y el 8% que efectivamente le fue pagado durante ese período específico);

I.19.- A GEORGINA SELMIRA BARRIENTOS MIMIZA, por todo el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y diciembre de 2023, la suma equivalente a un 6% de la **remuneración básica mínima nacional vigente durante el mismo período** (suma equivalente a la diferencia entre el 15% que debía percibir como *orientadora* y el 9% que efectivamente le fue pagado);

I.20.- A MANUEL ALEJANDRO ALCAYAGA VERA, por el período comprendido entre los meses de octubre y diciembre de 2022, la suma equivalente a un 20% de la **remuneración básica mínima nacional vigente durante el mismo período** (suma correspondiente a lo que debía percibir como *inspector general* y que no le fue pagada en lo absoluto) y, por el período de enero a diciembre de 2023, la suma equivalente a un 6% de la **remuneración básica mínima nacional vigente durante el mismo período** (suma equivalente a la diferencia entre el 20% que debía percibir por dicha función y el 14% que efectivamente le fue pagado durante ese período específico); y



I.21.- A SANDRA MABEL ÁLVAREZ PÉREZ, por el período comprendido entre los meses de abril de 2022 y febrero de 2023, la suma equivalente a un 6% de la remuneración básica mínima nacional vigente durante el mismo período (suma equivalente la diferencia entre el 20% que debía percibir como jefe de UTP y el 14% que efectivamente le fue pagado).

II.- Los pagos indicados, ordenados efectuar en la decisión anterior **-cuyos montos deberán determinarse,** conforme los datos registrados en las liquidaciones de remuneración aportadas al presente juicio, correspondientes a los períodos señalados en la decisión anterior, mediante liquidación que se practicará **en la etapa de ejecución del fallo-**, por tratarse de remuneraciones impagas, **deberán efectuarse con los reajustes e intereses** que establece el artículo 63 del código del ramo.

III.- SE RECHAZA en lo demás la referida demanda, esto es, respecto de la actora N°4, **LISETTE JOANA MALDONADO CÁRDENAS,** conforme las razones expuestas en el numeral 4 del fundamento Undécimo.

IV.- No se condena en costas a la parte perdedora, acorde lo argüido en el último basamento del presente fallo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RIT O-89-2024.

RUC 24- 4-0570930-5.

Proveyó don(a) GUILLERMO ALFREDO CADIZ VATCKY, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas.

En Punta Arenas a treinta de noviembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución precedente.





Guillermo Alfredo Cádiz Vackky

Juez

Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas

Treinta de noviembre de dos mil veinticuatro
11:10 UTC-3

